

8964
Wu

C. 7748/05 "Air Liquide Argentina SA y otros s. apelación de Resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia".

Buenos Aires, 10 de agosto de 2013.

AUTOS Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Para examinar los planteos deducidos con relación a la prescripción de la acción, es necesario destacar las circunstancias en las que han sido presentados.

En el marco del procedimiento de la Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156 (LDC), el 10 de agosto de 2001 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) inició una investigación por la posible existencia de prácticas anticompetitivas en la venta de oxígeno líquido a hospitales y sanatorios. Sobre la base de la prueba recabada (informativa, testimonial, secuestro de documentación en diferentes allanamientos) y del análisis del mercado involucrado, concluyó que Aga SA, Air Liquide Argentina SA, Praxair Argentina SRL e Indura Argentina SA podían estar involucradas en prácticas contrarias a la LDC. Cumplidas las distintas etapas del procedimiento administrativo -en las cuales dichas empresas ejercieron su derecho de defensa-, el 15 de julio de 2005, el Secretario de Coordinación Técnica (SCT) del Ministerio de Economía, previo dictamen de la CNDC, dictó la Resolución N° 119 mediante la cual ordenó a dichas firmas que cesaran y se abstuvieran de concertar precios, repartirse clientes y coordinar posturas en los procesos de contratación de oxígeno medicinal entre 1997 y 2002, y les impuso multas de \$ 26.100.000, \$ 24.900.000, \$ 14.200.000 y \$ 5.100.000, respectivamente (art. 46, incs. a y b, de la ley 25.156), de acuerdo con la gravedad de la conducta de "cartelización" y sus consecuencias en un mercado que la Comisión consideró crítico por la naturaleza del producto involucrado (ver considerandos 1 al 18 de la resolución del 10 de agosto de 2012 dictada por esta Sala a fs. 9574/9668vta.).

Contra esa decisión del órgano administrativo, las cuatro empresas sancionadas interpusieron el recurso directo de apelación previsto en el art. 52 de la LDC. Consecuencia de ello, las actuaciones fueron elevadas a

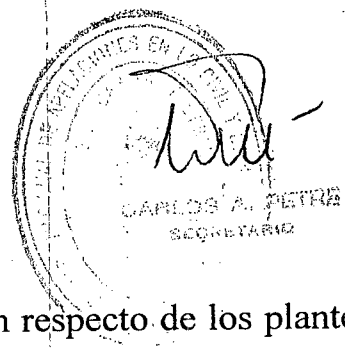
USO OFICIAL

la Cámara y recibidas en esta Sala el 29 de marzo de 2006 para revisar judicialmente la sanción impuesta (ver fs. 9215vta.).

Después de distintos incidentes promovidos por dos de las empresas (oposición al pago de la tasa de justicia y planteo de inconstitucionalidad de los artículos de la ley 23.898 aplicables a los recursos directos –Praxair y Air Liquide- y revocatoria contra la providencia que dispuso el traslado de los recursos –Air Liquide-, los cuales fueron desestimados, previa intervención del representante del fisco y del Ministerio Público Fiscal, en las resoluciones dictadas el 6 de febrero y el 17 de abril de 2007, a fs. 9260/67 y 9280/82, respectivamente), se presentó en esta instancia judicial el Estado Nacional y contestó el referido traslado (ver escrito del 11 de julio de 2007 a fs. 9289/9377vta.), poniéndose los autos para resolver el 14 de agosto de 2007.

En esas condiciones, el 20 de febrero de 2008, luego de proveerse un pedido de audiencia de Air Liquide para informar “in voce” en los términos del art. 264 del Código Procesal Civil y Comercial (fs. 9379/80), el Tribunal solicitó al Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una prórroga de ciento veinte días para dictar sentencia, en virtud del volumen de las actuaciones y de la diversidad, la naturaleza y la complejidad de los planteos deducidos. Esa prórroga, al igual que la ampliación solicitada, por las mismas razones, el 10 de septiembre de 2008, fue concedida, lo cual se notificó por cédula a las partes (ver fs. 9381/9401).

Examinadas la totalidad de las actuaciones administrativas que elevó el Ministerio de Economía y los planteos deducidos por las empresas en sus respectivos recursos, el tribunal dictó la resolución del 23 de diciembre de 2008, a través de la cual suspendió el llamamiento de autos y dispuso una serie de medidas necesarias para resolver las cuestiones propuestas por las recurrentes, a saber: solicitó a la CNDC que remitiera diversos incidentes originados por recursos de apelación promovidos durante el trámite administrativo en los que tuvieron intervención la Sala II de este Fuero y la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, como así también todos los anexos de prueba de las empresas y cualquier otro incidente, actuación o documentación correspondiente al expediente administrativo;



también intimó a las recurrentes para que informasen respecto de los planteos de nulidad de los allanamientos dispuestos por distintos jueces federales en los que se había secuestrado la documentación ponderada en la Resolución SCT N° 119/05 y para que, en su caso, acompañasen copia de las decisiones recaídas (ver fs.9402/vta.).

Consecuencia de esa medida la CNDC remitió la documentación que surge del oficio agregado a fs. 9404/06, lo cual se hizo saber por cédula a las recurrentes (fs. 9408/12). Asimismo, Air Liquide pidió prórroga para responder el requerimiento e Indura informó haber planteado la nulidad del allanamiento e impugnado y desconocido la documentación secuestrada. Aga y Praxair manifestaron que no habían promovido nulidades con motivo de esa medida (ver fs. 9413/17).

A fs. 9418 se hizo saber a Indura que debía cumplir con la información requerida y acompañar copia de las resoluciones judiciales relacionadas con el allanamiento.

El 7 y 8 de abril de 2009, Air Liquide e Indura informaron acerca de los planteos de nulidad de los allanamientos, y solicitaron que se librasen oficios a la Cámara Federal de La Plata, al Juzgado Criminal y Correccional Federal de Campana y a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, ante los cuales tramitaron incidentes de nulidad, apelaciones y recursos de casación (fs. 9423 y 9424). El 21 de abril la Sala dictó la resolución de fs. 9425 en la que ordenó el libramiento de oficios a todos los tribunales que intervinieron en los allanamientos de las empresas y en los incidentes que aquéllas promovieron.

En ese mismo mes se recibió de la CNDC más documentación correspondiente a las actuaciones administrativas (ver detalle de fs. 9426/31).

Entre los meses de abril y agosto de 2009 se cumplieron, de oficio, distintas actuaciones relacionadas con los pedidos a los tribunales federales (ver fs. 9434/50).

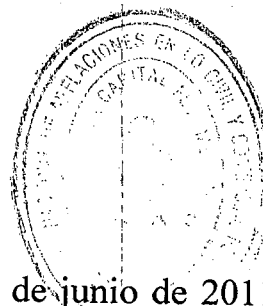
Respecto de la documentación remitida por la CNDC, el 14 de septiembre de 2009 se requirió a dicho organismo que informase si había elevado la totalidad de las actuaciones administrativas, habida cuenta de que faltaba el cuaderno de prueba de Praxair (fs. 9451).

El Juzgado Federal de La Plata remitió copia certificada de la causa promovida en virtud del allanamiento (fs. 9453), en tanto que el tribunal dictó la resolución del 30 de octubre de 2009 mediante la cual hizo saber a los recurrentes que la Comisión había elevado la totalidad de la documentación (ver oficio de fs. 9454), intimó a Praxair -y a las demás empresas- para que presentaran las copias del cuaderno de prueba que pudieran tener en su poder, ordenó el libramiento de un oficio a la Cámara en lo Penal Económico para que remitiera copia de las resoluciones dictadas en los incidentes mencionados a fs. 9402, y dispuso la reiteración de los oficios a los juzgados federales para que enviaran las actuaciones relacionadas con los allanamientos realizados en las empresas sancionadas (ver fs. 9456/57).

El 4 de diciembre de 2009 la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico remitió copia certificada de las resoluciones requeridas (fs. 9474), y el 9 de ese mes Praxair acompañó copias de su cuaderno de prueba, lo cual se hizo saber a las partes en los términos del art. 129, inc. 2, del Código Procesal Civil y Comercial (fs. 9478); y el 3 de febrero de 2010 se reiteraron los oficios a los juzgados federales de Campana y de San Isidro (fs. 9482).

Asimismo, el 25 de febrero de 2010 se notificó a Praxair y al Estado Nacional que el tribunal había advertido un faltante de varias fojas en las copias del cuaderno de prueba que esa empresa adjuntó (fs. 9492); el 18 de marzo se ordenó la reserva de un expediente remitido por el Juzgado Federal de Campana y se requirieron los incidentes de nulidad de allanamiento y de abuso de autoridad que no habían sido enviados (ver fs. 9503/04); y el 7 de abril se recibió el expediente del Juzgado Federal de San Isidro (fs. 9503vta.).

Después de distintas presentaciones referidas al cuaderno de prueba de Praxair, el Tribunal desestimó el pedido formulado por dicha empresa a fs. 9499 para que se intimase a la CNDC a adjuntar las fojas faltantes bajo apercibimiento de decretar la nulidad de todo lo actuado, y tuvo por reconstruida la prueba con las copias acompañadas a fs. 9476; también reiteró el oficio al Juzgado Federal de Campana (ver resolución del 21 de septiembre de 2010 a fs. 9522/24vta.). El 7 y el 28 de diciembre de 2010 se desestimaron pedidos de Indura relacionados con la reconstrucción del cuaderno de prueba



Wu 8366
CARLOS A. BETHS
SECRETARIO

de Praxair (fs. 9531/vta. y 9534/vta.), y el 16 de junio de 2011 se recibieron los incidentes requeridos al Juzgado Federal de Campana (fs. 9558/vta.).

En tales condiciones se rechazó el pedido de Air Liquide para informar "in voce", se hizo saber a las partes que se encontraba cumplida en su totalidad la medida dispuesta por el Tribunal a fs. 9402/vta. con sus ampliaciones de fs. 9425, 9456/57 y 9503, e incorporados a la causa todos los elementos necesarios para resolver sobre los recursos interpuestos (ver resolución del 7 de octubre de 2011 a fs. 9561/vta.); y se desestimó la incorporación de las copias certificadas de un expediente administrativo remitido por la CNDC sobre una denuncia formulada en octubre de 2011 por un fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires por presuntas conductas ilegales de las empresas proveedoras de gases medicinales a los hospitales públicos (resolución del 19 de abril de 2012 a fs. 9574/vta.).

En esa oportunidad se pusieron los autos para resolver los recursos deducidos por las firmas sancionadas, dictándose sentencia el 10 de agosto de 2012 mediante la cual se examinaron y desestimaron todos los planteos formulados y se confirmó la Resolución N° 119/05 de la SCT (fs. 9584/9668vta.).

Además del amplio trámite cumplido en esta instancia, es pertinente recordar que —como se destacó en la mencionada sentencia (ver considerando primero)—, la causa contiene más de 9000 fojas de actuaciones administrativas, 4700 fojas de cuadernos de prueba ofrecida por las firmas investigadas, voluminosa documentación secuestrada en allanamientos, y otros muchos anexos. La resolución administrativa apelada y su dictamen previo constan de 183 fojas, los cuatro recursos interpuestos y su contestación superan las 600 fojas, y en ellos se formularon numerosos planteos (entre otros, la incompetencia del órgano que dictó la resolución, la nulidad del procedimiento y de la decisión recurrida, replanteos de prueba, análisis de los mercados involucrados, agravios respecto de la validez e interpretación del material secuestrado y de los fundamentos para imponer la sanción y cuantificar la multa). También se encuentran agregados, como se dijo, expedientes relacionados con los allanamientos dictados por juzgados federales de distintas jurisdicciones, incidentes de nulidad y una causa

USO OFIC AL

proveniente del Fuero Penal Económico. Y existen, asimismo, diferentes causas decididas por este Tribunal con motivo de planteos deducidos por las empresas durante el procedimiento administrativo relacionadas con algunos de los agravios deducidos (vgr. pedidos de medidas cautelares, nulidades, recursos de queja).

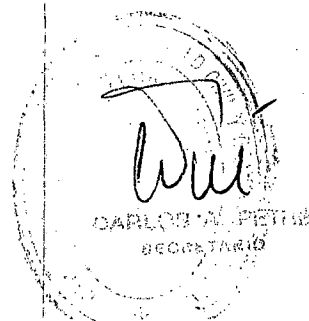
2. Después de haberse dictado la sentencia, las siguientes empresas presentaron escritos con el objeto que a continuación se precisa:

Air Liquide Argentina SA (fs. 9687/95vta.): pide que se anule o revoque la sentencia y se declare prescripta la acción, por haber operado de pleno derecho el 15 de julio de 2010 el vencimiento del plazo de cinco años previsto en el art. 54 de la LDC, la cual debió haber sido declarada de oficio;

Indura Argentina SA (fs. 9696/9701vta.): plantea recurso de reposición "*in extremis*" en los términos de los arts. 447 del Código Procesal Penal y 239 del Código Procesal Civil y Comercial, puesto que la sentencia se dictó después de haber operado de pleno derecho la prescripción de la acción el 10 de agosto de 2006 teniendo en cuenta la fecha de inicio del sumario (denuncia) o, en subsidio, en octubre de 2008 si se toma la fecha en que finalizó el sumario y se perfeccionó la denuncia (art. 32 de la LDC)- o el 15 de julio de 2010 si se considera la fecha de la Resol. SCT N° 119/05; es decir, invoca distintas fechas según sea la causal interruptiva que se considere (art. 54 de la ley 25.156 y 67 del Código Penal);

Praxair Argentina SRL (fs. 9702/06vta.): solicita que se declare operada de pleno derecho la prescripción de la acción –que se produjo el 16 de julio de 2010, de acuerdo con el art. 54 de la LDC– y, por ende, la nulidad de la sentencia.

3. Los fundamentos que sostienen las empresas se pueden sintetizar de este modo: *a)* el procedimiento que establece la ley 25.156 es de naturaleza penal y las sanciones previstas tienen carácter punitivo o represivo, por lo que corresponde la aplicación de las disposiciones, principios y garantías constitucionales del derecho penal, entre ellas las referidas a la prescripción, *b)* la prescripción en materia penal es de orden público ya que excede el interés de las partes al involucrar la existencia de la pretensión punitiva del Estado; se produce de pleno derecho y debe ser declarada aun de oficio en

Poder Judicial de la Nación

USO OFIC AL

cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo, pues su reconocimiento es consustancial con la garantía de defensa en juicio, ya que impide el inicio o la prosecución de la persecución o acción represiva, c) sin perjuicio de ello, los principios y las reglas del derecho penal resultan aplicables aún en el ámbito de las sanciones administrativas, según es doctrina de la Corte Suprema, d) el debido proceso legal reconocido en el art. 18 de la Constitución Nacional es un derecho que se extiende a cualquier tipo de proceso, que involucra la garantía de ser juzgado en un plazo razonable sin demoras indebidas, e) la LDC regula en forma expresa y taxativa las causales de interrupción de la prescripción (denuncia o comisión de otro hecho sancionado por esa ley), por lo que corresponde aplicar la norma del art. 55 en forma directa y exclusiva, sin integrarla en forma supletoria con el Código Penal, f) no se presenta en el caso ninguna de las causales previstas en la ley (Praxair señala que la denuncia es la que dio origen al procedimiento para investigar la conducta sancionada y que la formulada por el Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires el 25-10-2011 es posterior a que operara de pleno derecho la prescripción, en tanto que Air Liquide añade que han transcurrido más de cinco años desde la denuncia de "ADECRA" -C.1008-; ambas afirman que no existe otro hecho reconocido en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada que las sancione).

A todo evento, Air Liquide sostiene que tampoco se verifican las causales de interrupción del art. 67 del Código Penal de acuerdo con el texto de la ley 25.990. En lo que respecta a la causal interruptiva de la prescripción prevista en su inciso tercero -sentencia condenatoria aunque no se encuentre firme-, precisa que entre la resolución que impuso la multa y la sentencia que la confirmó transcurrieron los cinco años que establece el art. 54 de la ley 25.156.

Asimismo, Air Liquide alega que no hay en este expediente prueba acerca de que la conducta sancionada se hubiese mantenido en el tiempo con posterioridad a la resolución administrativa, por lo que no puede concluirse que existió una "conducta de ejecución continuada".

Por otro lado, Indura destaca –con relación a la prolongación del proceso- que no se cumplió con la prórroga de ciento veinte días otorgada el 7 de agosto de 2008 para dictar sentencia.

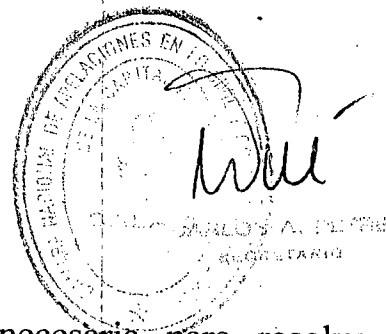
4. Además de los planteos formulados por las mencionadas empresas, se debe precisar que todas ellas –inclusive AGA SA, actualmente denominada Grupo Linde Gas Argentina SA- interpusieron recurso extraordinario contra la sentencia del 10 de agosto de 2012, oportunidad en la cual también plantearon la prescripción de la acción. (Los escritos fueron reservados en Secretaría hasta tanto se resolviesen los planteos en examen; ver providencia y nota de fs. 9817/vta.)

5. Al contestar el traslado de la prescripción de la acción (ver fs. 9819/31, 9832/43vta. y 9845/58), el Estado Nacional cuestionó la vía utilizada por las empresas (revocatoria *in extremis* y/o nulidad), desconoció que se hubiese vulnerado el debido proceso y alegó que las recurrentes tuvieron oportunidad de efectuar dicho planteo antes de la sentencia, sin perjuicio de lo cual consintieron el llamado de autos a resolver después de que la Corte Suprema otorgara dos prórrogas al tribunal para su dictado.

Destacó, en ese sentido, la duración razonable del proceso de acuerdo con su complejidad, garantía que consagra la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales, como así también que en todo momento hubo interés del Estado en la persecución de la conducta, en tanto que las empresas apelantes articularon todo tipo de excepciones y planteos.

Por otro lado, negó que se hubiera producido la prescripción por cuanto se sancionó una conducta única y continua. Añadió que se dedujeron dos nuevas denuncias referidas al mismo hecho sancionado, que involucra a las mismas empresas en periodos diferentes a los que fueron objeto de esta causa (Expedientes S01:0332521/2004 “Praxair Argentina SA, Air Liquide Argentina SA, Aga SA y Oxy Net SA s. infracción a la ley 25.156 –C.1008- y S01:0430130/2011 “Ricardo Szelagowski Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires s. solicitud de intervención de la CNDC” –C.1409-).

Finalmente, invocó como cuestión prejudicial y como causal de suspensión del plazo de prescripción, la medida para mejor proveer dictada



por la Sala el 23 de diciembre de 2008, necesaria para resolver las impugnaciones y nulidades de los allanamientos formuladas por las empresas.

6. Así planteada la cuestión, se debe recordar que dictada la Resolución N° 119/05 por la SCT, la jurisdicción de este Tribunal quedó habilitada con los recursos directos de apelación interpuestos por las firmas sancionadas, en los términos del art. 53 de la ley 25.156 y del decreto 89/01 (ver fs. 9202).

El procedimiento cumplido en esta instancia judicial concluyó con el dictado de la sentencia del 10 de agosto pasado, la cual es impugnada por las apelantes a través de los escritos antes mencionados.

Si bien es cierto que a partir de ese momento la jurisdicción del tribunal queda, en principio, limitada para corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros sin alterar lo sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio, o bien para resolver acerca de la admisibilidad de los recursos previstos por el ordenamiento procesal (*arg. arts. 166, 257 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; esta Sala, doctrina de la causa 7114/02 del 27-10-2011*), también lo es que la naturaleza de las cuestiones planteadas y de los derechos invocados por las empresas determina la conveniencia de decidir si la sentencia del 10 de agosto de 2012 es nula por haberse dictado después de operada de pleno derecho la prescripción de la acción prevista en el art. 54 de la ley 25.156, la cual debió ser declarada de oficio –según sostienen– por tratarse de un instituto de orden público en materia penal.

Siguiendo el criterio que, en este aspecto formal, postulan las peticionarias, cabe considerar que la aplicación de la fórmula del orden público en materia de prescripción se vincula directamente con la necesidad de su declaración de oficio, habida cuenta de que constituye la forma más ágil para conjurar la situación según la cual la persecución penal traspasó los límites temporales aptos para su ejercicio prescindiendo de la prescripción operada, y evitar así que continúen sus efectos. De otra manera se prolongaría el juicio innecesaria e injustamente en contra de los fundamentos de orden público que autorizan a declararla de oficio, pues basta para ello con la simple comprobación de su existencia, toda vez que la prescripción resta al juicio

USO OFIC AL

penal la acción que lo pone en movimiento (*votos en disidencia de los jueces Augusto C. Belluscio y Carlos S. Fayt en Fallos 327:3312*).

En tal sentido, se ha dicho que la prescripción de la acción exige un pronunciamiento previo a toda otra cuestión pendiente de resolución y debe ser declarada en cualquier estado de la causa, habida cuenta de que los “tribunales de represión”, antes de examinar el fondo de la cuestión, deben asegurarse de que el hecho no está cubierto por la prescripción (*cfr. Oscar N. Vera Barros, “La prescripción penal en el Código Penal, Lerner Editora, Segunda Edición, 2007, págs. 216 y 294*).

Es desde esa perspectiva que se examinarán, en esta instancia ordinaria, los planteos de prescripción deducidos —como expresamente lo piden las empresas que se consideran afectadas por la referida situación—, sin perjuicio de que todas ellas la hubieran invocado, asimismo, en sus respectivos recursos extraordinarios interpuestos contra la sentencia dictada por el tribunal el 10 de agosto de 2012.

7. Las empresas sostienen que los principios y las reglas del derecho penal rigen el caso ya sea por la naturaleza de la ley 25.156, o porque la Corte Suprema ha decidido que son aplicables en el ámbito de las sanciones administrativas. Con esa inteligencia invocan, en esta instancia judicial —una vez dictada la sentencia motivada por los recursos directos que ellas mismas interpusieron contra la resolución administrativa—, que la acción estaba prescripta al menos dos años antes del pronunciamiento de este tribunal. Y alegan que no obsta a ello que se hubieran cumplido numerosas actuaciones con posterioridad a ese momento. Entre ellas cabe destacar las resoluciones del 21 de septiembre y del 28 de diciembre de 2010, en las que se tuvo por reconstruido el cuaderno de prueba de Praxair y se desestimaron planteos formulados al respecto, la del 7 de octubre de 2011 en la que se rechazó un pedido para informar “in voce” formulado por una de las empresas y se hizo saber que se encontraban incorporados todos los elementos necesarios para resolver los recursos (por ejemplo, los expedientes relacionados con los allanamientos que Indura y Air Liquide solicitaron que se requiriesen por oficio a los juzgados federales intervinientes; ver fs. 9423 y 9424), y la del 19



de abril de 2012 en la que se pusieron los autos para dictar sentencia (fs. 9574/vta.).

Ahora bien, en esta misma causa se rechazó un planteo que las empresas formularon como si las actuaciones promovidas con los recursos directos fuesen un juicio criminal regido en todos sus aspectos por las disposiciones y los principios propios de una causa penal. Ello fue con motivo de la oposición de Praxair y Air Liquide a pagar la tasa de justicia en el inicio del trámite, deducida con fundamento en la naturaleza penal de las actuaciones y en la aplicación de los códigos penal y procesal penal (ver resolución del 6 de febrero de 2007 a fs. 9260/67).

Se destacó en ese pronunciamiento que la aplicación de las normas de los códigos penales está dispuesta en la ley 25.156 para los casos no previstos por ésta y sólo en cuanto fuesen compatibles con sus disposiciones (art. 56). En este aspecto hay que tener en cuenta que la conducta investigada no configura ninguno de los tipos penales previstos en la legislación criminal.

Por otro lado, se precisó que el derecho de la competencia, más allá de la mencionada remisión a los códigos penales, fue objeto de una progresiva “despenalización” (ver leyes 11.210, 12.906, 22.262 y 25.156), pues a medida que se fueron ampliando las facultades del órgano administrativo, correlativamente se limitó la aplicación de la pena de prisión hasta su eliminación en la ley vigente, que no hace referencia a delitos y penas, sino a infracciones, conductas o prácticas restrictivas de la competencia y a sanciones (arts. 2, 46, 48 y 49 de la ley 25.156). En tal sentido, se añadió que ya en la ley 22.262 el legislador había abandonado un enfoque estrictamente jurídico-penal que circunscribía la política en materia de defensa de la competencia a una represión de tipo penal, y previsto un procedimiento que no necesariamente concluía con una sanción de tipo penal (*Horacio P. Fargosi, “Apostilla sobre la Ley de Defensa de la Competencia”, ADLA XL-C, págs. 2521 y ss.*).

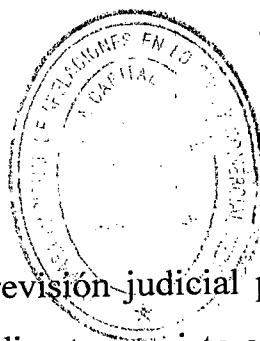
También se señaló que el proyecto de la ley 25.156, sancionado por el Congreso de la Nación para reemplazar la ley 22.262, disponía la aplicación supletoria –además de los códigos penales– del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (art. 56), y fijaba la competencia de la Cámara en lo

Comercial para revisar las decisiones del Tribunal de Defensa de la Competencia (art. 53), en lugar de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (art. 27 de la ley 22.262). Y que si bien esas disposiciones fueron observadas por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 1019/99 (con posterioridad, en el decreto reglamentario 89/01, se mantuvo la competencia de un fuero que no es penal), exteriorizaban la intención del legislador de “despenalizar” la materia; intención que también fue plasmada durante el debate parlamentario del proyecto de ley (Reunión del 19-5-1999, Orden del Día n° 1840. Por ejemplo, se mencionó que se había previsto la jurisdicción de la Cámara Civil y Comercial por la naturaleza y orientación de la legislación propuesta y que se suprimió el inc. e del art. 52 en cuanto preveía a “la resolución que dispone el sobreseimiento del denunciado” pues la ley “no contiene características penales”; ver intervenciones del diputado Dumon).

Asimismo, se hizo mérito de que la ley 25.156, más allá de sus normas de tipo represivo, no tiene las características absolutas que justificaron la inclusión de las anteriores leyes dentro del derecho penal especial, y que ya existía cierto consenso en encuadrarlas en el sistema regulatorio del poder de policía comercial y de monopolios (*Horacio P. Fargosi, “Breves Anotaciones sobre la nueva Ley de Defensa de la Competencia”, ADLA LIX-D, págs. 3942 y ss., con citas de Bielsa, Diez, Escola, Gordillo y Dromi; asimismo, sostiene que, respecto de la Sherman Act, autores como B. Schwartz han entendido que median aspectos que hacen a la competencia del derecho administrativo*).

Para finalizar se dijo que aun cuando se atribuyese naturaleza penal a la infracción y a la multa impuesta por el órgano administrativo, ello no significaba por sí solo que debieran ser asimilados a los delitos y a las penas del derecho penal común (doctrina de Fallos 298:175), pues la materia de que se trata –defensa de la competencia– hizo que el legislador se apartase de dicha disciplina en ciertos aspectos, de modo que no cabe la aplicación de las normas de los códigos penal y procesal penal para la totalidad de las cuestiones que se pudieran plantear con relación a la ley 25.156 sin atender a las concretas particularidades de caso.

Y con especial referencia a la oportunidad en que se debía tributar la tasa de justicia, se ponderó que el procedimiento sustanciado ante el órgano



Wu

9870

administrativo culminó con la multa cuya revisión judicial promovieron las empresas sancionadas por la vía del recurso directo previsto en el art. 52 de la ley 25.156, ante este Fuero que no integra la Justicia Penal.

8. Las precisiones efectuadas no implican desconocer las normas sobre la prescripción de la acción del capítulo IX de la ley 25.156 ni la aplicación al ámbito de las sanciones administrativas de las garantías constitucionales que rigen en materia penal. La finalidad que se persigue con su formulación es la de destacar que no es ésta la segunda instancia del juicio criminal o del proceso de enjuiciamiento penal regulado en el Código Procesal Penal, tanto por la especialidad de las normas que lo rigen como por su estructura, los sujetos que intervienen, el tipo de las conductas prohibidas, las sanciones previstas y la finalidad perseguida en la LDC. De ahí que la aplicación de las normas, principios y garantías constitucionales del derecho penal que invocan las empresas —entre las cuales incluyen la prescripción de la acción—, se debe examinar sin prescindir de las características del procedimiento especial que prevé la ley 25.156, de acuerdo con sus disposiciones y el bien jurídico tutelado, al cual resultan aplicables los códigos penales sólo en cuanto sean compatibles (art. 56).

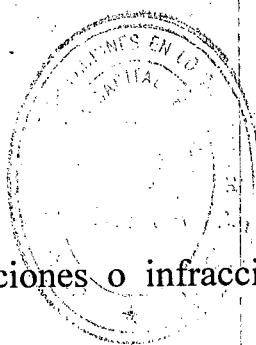
En efecto, la intervención del tribunal en el marco del art. 52 de la LDC es consecuente con la clásica doctrina fijada por la Corte Suprema en los precedentes “*Fernández Arias c. Poggio*”, “*Litoral Gas*” y “*Ángel Estrada*” (Fallos 247:646, 321:776 y 328:651, respectivamente), según la cual el ejercicio de facultades materialmente jurisdiccionales por parte de los órganos administrativos queda supeditada a la existencia de un control judicial suficiente. Ello supone, en términos generales, que los afectados por la decisión administrativa tienen derecho a ocurrir ante un tribunal perteneciente al Poder Judicial, en un proceso en el que puedan controvertir todos los aspectos fácticos y jurídicos vinculados con la controversia. Tal circunstancia ha llevado a parte de la doctrina a considerar que cuando determinadas leyes prevén un procedimiento especial de contralor judicial a través de recursos “directos” o de “apelación”, en rigor, se tratan de acciones judiciales en instancia única, en las que se impugna la decisión jurisdiccional de un órgano o tribunal administrativo, siendo por ende incorrecta su completa asimilación

con el recurso de apelación previsto en las normas rituales (*esta Cámara, Sala 2, causa 1473/10 del 4-10-2011 y sus citas de doctrina: Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, FDA, 1998, T. 1, pág. IX-29; Hutchinson, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos, Astrea, 2000, pág. 163; Grau, Armando E., Habilidad de la instancia contencioso administrativa; Editora Platense, 1971, págs. 64 y siguientes*).

En esa línea de pensamiento se pronunció la Cámara Federal de Casación, al examinar los recursos deducidos contra una sentencia de la Cámara en lo Penal Económico que confirmó la multa impuesta por la SCT en los términos de la ley 22.262 (*Sala IV, causas n° 11.782 "Juan Minetti SA s. rec. de casación", Reg. N° 1011/12.4, y 11.783 "Cem. S.Martín y L. Negra s. rec. de casación", Reg. N° 1012/12.4, ambas del 21 de junio de 2012*). En esos precedentes, declaró inadmisibile la "vía casatoria" de impugnación por considerar, en lo sustancial, que el recurso de casación sólo es viable respecto de sentencias definitivas dictadas por órganos jurisdiccionales en la órbita del Poder Judicial de la Nación –en el marco de la ley 23.984 (Código Procesal Penal)- y en razón de la comisión de conductas ilícitas que constituyan delitos, mas no de sanciones impuestas por la autoridad administrativa con motivo de infracciones a la anterior ley de defensa de la competencia.

A ese fundamento añadió que el recurso directo previsto por la ley 22.262 se enmarca en el control judicial suficiente que debe ser garantizado respecto de los actos de la administración de naturaleza jurisdiccional. Y, en tales condiciones, concluyó que la improcedencia del recurso de casación no violaba la garantía de la doble instancia judicial garantizada en materia penal por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales que la integran.

Tal criterio se ajusta a la doctrina de la Corte Suprema según la cual el derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, garantizado en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, está supeditado a la existencia de un fallo final dictado contra persona "inculpada de delito" o "declarada culpable de un delito", por lo que resultan ajenas a su ámbito los pronunciamientos judiciales que condenen o absuelvan con motivo



de la imputación de faltas, contravenciones o infracciones administrativas (Fallos: 323:1787 y 325:2711).

En síntesis, no corresponde convalidar la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal respecto de las infracciones administrativas, habida cuenta de las particularidades del bien jurídico protegido por la ley específica, lo cual se ve reafirmado por la naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la represiva del derecho penal (Fallos 330:1855; en ese sentido, *Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, causa 19.858/08 "León Alfredo" del 3-9-2009*).

9. Es con esa perspectiva que se deben examinar los planteos deducidos por las empresas sancionadas.

En primer término hay que destacar que no todas las firmas coinciden en la fecha en la cual habría operado la prescripción que invocan. Mientras que Indura considera que, según el art. 55 de la ley 25.156, el último acto interruptivo fue el inicio del sumario (equiparable a la denuncia), Air Liquide y Praxair computan el término de cinco años previsto en el art. 54 a partir de la resolución administrativa que impuso la multa. (Indura también considera este último acto pero como un "mero ejemplo que no es válido" y una "extrapolarización hipotética" de las causales de interrupción contempladas en el art. 67 del Código Penal.)

Esta circunstancia permite advertir no sólo ciertas vacilaciones en la forma en que resultaría aplicable el instituto de la prescripción en esta instancia judicial, sino también una contradicción con un principio que todas las empresas han invocado: que la ley 25.156 se debe aplicar en forma directa y exclusiva en cuanto regula expresamente las causales de interrupción de la prescripción (art. 55), sin integrarla con las disposiciones del Código Penal (Air Liquide a fs. 9688vta., Indura a fs. 9700 y Praxair a fs. 9704vta. y 9706).

De acuerdo con ese principio de "especialidad de la ley" que rige las infracciones administrativas sancionadas por un ordenamiento jurídico que les es propio, sólo procede la aplicación supletoria de los principios y reglas generales del derecho penal cuando el criterio que se debe observar no resulta de la letra y del espíritu de aquella, y en la medida en que resulten compatibles

con sus disposiciones (*Corte Suprema, doctrina de Fallos* 274:425, 295:869, 323:1620 y “*Comisión Nacional de Valores c. Telefónica Holding Argentina SA*”, C.1614.XLIV, del 26-6-2012).

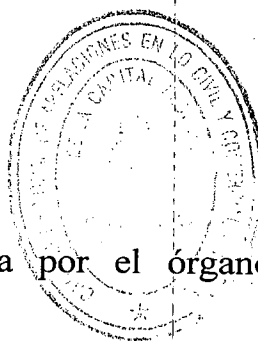
La idea se ha sintetizado del siguiente modo: si existe un régimen específico para la interrupción de la prescripción de la acción respecto de una infracción, no son aplicables las disposiciones generales del Código Penal sobre la materia (*Corte Suprema, Fallos* 274:425 y *Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, causa* 738/90 “*A. Mellino SACIFI c. E.N. (A.N.A.) s. aduana*”, del 21-6-1996; *Sala IV, causas “Instrumentos Musicales (Promúsica) –T.F.– A.N.A, del 22-6-1993; 29.155/06 “Ascona S.A. (en autos Inca CM de Seguros TF 10425-A)” del 23-10-2007*).

Ese criterio fue expresamente invocado por las empresas, no obstante lo cual incluyeron, sin explicación alguna, como causal de interrupción de la prescripción a la resolución sancionatoria del órgano administrativo, la cual no está prevista en la ley 25.156. (El único acto procesal al cual el art. 55 le asigna carácter interruptivo corresponde al procedimiento administrativo: la denuncia.)

Sobre esa base corresponde interpretar los arts. 54 y 55 de la LDC en cuanto disponen que “Las acciones que nacen de las infracciones en esta ley prescriben a los (5) años” y que “Los plazos de prescripción se interrumpen con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por esta ley”, y decidir si es nula la sentencia de este tribunal del 10 de agosto de 2012, que confirmó la sanción impugnada por las empresas, por haber sido dictada una vez cumplidos aquéllos.

La aplicación del instituto de la prescripción invocado por las empresas en esta instancia judicial, llevaría a concluir —en tal contexto normativo— que en el caso de que no existiera la comisión de otro hecho prohibido por la LDC, en el plazo de cinco años se debería sustanciar íntegramente no sólo el procedimiento administrativo previsto en el capítulo VI, iniciado de oficio o por denuncia o (art. 26), sino también el judicial cuando los sancionados promoviesen, por la vía del recurso directo (arts. 52 y

Poder Judicial de la Nación



Carlos A. Petre
CARLOS A. PETRE
SECRETARIO

53), la revisión de la resolución dictada por el órgano administrativo competente.

Esa es la postura que sostiene Indura al invocar que la prescripción operó el 10 de agosto de 2006, es decir, una vez transcurridos cinco años desde la iniciación del sumario. Si se siguiera esa línea interpretativa en el caso, el tribunal hubiera tenido un año para recibir las actuaciones, dar trámite a los recursos, examinar todos los planteos deducidos, resolver los incidentes promovidos y dictar la sentencia (adviértase que el último de los recursos interpuestos contra la Resol. 119/05 fue el 8 de agosto de 2005; fs. 9156/69).

Con tal perspectiva, inclusive podría darse el supuesto de que aun cuando la resolución condenatoria se dictase antes del plazo de prescripción, igualmente se extinguiría la acción como consecuencia de su impugnación por la vía recursiva. Es decir, cuanto mayor sea la complejidad y gravedad de las conductas prohibidas que se investigan, mayor será también la probabilidad de que se produzca la prescripción en virtud de la revisión judicial cuya amplitud dependerá de los planteos que deduzcan las sancionadas en esta instancia.

Este resultado no es razonable por lo que no puede entenderse que hubiera sido esa la finalidad perseguida por el legislador con las disposiciones de los arts. 54 y 55 de la LDC. En la interpretación de la ley no debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (*Fallos 307:1018, 319:1765 y 324:2107*).

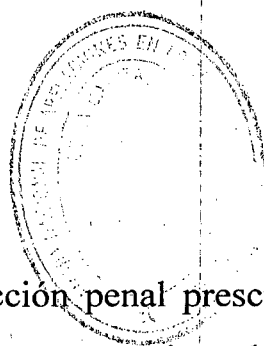
Se trata en el caso, como se consignó en la sentencia del 10 de agosto de 2012, de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia que han dado lugar a una compleja y extensa investigación por el órgano administrativo competente —como las que pueden involucrar varias de las conductas prohibidas por la LDC—, la cual culminó con una orden de cese y una sanción de multa a cuatro empresas por concertar precios, repartirse clientes y coordinar posturas en los procesos de contratación de oxígeno medicinal cuya relevancia en el ámbito de la salud pública huelga explicar.

USO OFIC AL

En síntesis, el hecho de que el legislador no hubiese previsto como causal para interrumpir el curso de la prescripción de las acciones que nacen de las infracciones a la LDC, ningún otro acto del procedimiento administrativo –posterior a la denuncia- o judicial, no permite colegir que el término de cinco años fijado en el art. 54, rige después de concluido el procedimiento administrativo con alguna de las sanciones previstas en el art. 46; es decir, que el plazo iniciado a partir de la denuncia continúe durante la instancia judicial promovida con el recurso directo, el cual tiene por objeto la revisión –con el alcance fijado por la Corte Suprema a partir de Fallos 244:548 y 247:646- de la decisión sancionatoria dictada por un órgano administrativo con facultades jurisdiccionales. De lo contrario, no podría descartarse que la amplitud propia de esa vía establecida en resguardo de los derechos constitucionales de los sujetos investigados, para revisar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas, pueda tener por consecuencia directa la absolución de los sancionados en la mayoría de los casos.

Para sortear ese resultado, las empresas han invocado una causal no incluida en la LDC, incurriendo en contradicción con el principio de especialidad de la ley que alegaron. Pretenden justificar de ese modo la razonabilidad en la aplicación de la prescripción en esta instancia judicial, después de haberse decidido numerosos planteos que formularon, ordenado distintas actuaciones necesarias para resolver los recursos que dedujeron y dictado la sentencia que confirmó la multa impuesta por la Secretaría de Coordinación Técnica.

El sentido que aquí se atribuye al régimen especial de la ley 25.156 regulatorio de la prescripción (arts. 54 y 55), es el único razonable de acuerdo con su letra y con su finalidad, y el que mejor armoniza todos los derechos constitucionales en juego: por un lado, el derecho de defensa y de debido proceso legal (art. 18 de la C.N.) que invocan las sancionadas, y por el otro, el de la sociedad para que las autoridades protejan la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados (art. 42 de la C.N.), derecho que ha sido reglamentado a través de la LDC en cuanto tutela el interés económico general a través de la sanción de las conductas que prohíben sus disposiciones.



9874
Wu -
JOSÉ A. PÉREZ
SECRETARÍA

Los motivos para que una acción penal prescriba son dos: que haya cesado el interés social por el castigo y que exista el peligro de que el inocente no pueda defenderse a causa de que el ejercicio de la acción se ha retardado (*ver dictamen de la Procuración General en Fallos 323:982 con remisión a una cita de Carrara: "Programa de Derecho Criminal - Parte General", volumen II, página 182, Editorial Temis, Bogotá, 1972*). En ese orden de ideas, la Corte Suprema ha precisado que "el instituto de la prescripción cumple un relevante papel en la preservación de la defensa en juicio, al impedir que los individuos tengan que defenderse respecto de acusaciones en las cuales los hechos básicos han quedado oscurecidos por el paso del tiempo y al minimizar el peligro del castigo estatal por hechos ocurridos en un pasado lejano" (*Fallos 327:4815*).

El agotamiento del interés público en la persecución penal, que sirve de fundamento a la extinción de la acción por prescripción, depende de la pérdida de toda utilidad en la aplicación de la pena que el autor del delito merece por ley (*voto de la jueza Carmen M. Argibay en Fallos 328:2056*).

La interpretación y aplicación del instituto de la prescripción que se propicia en este caso concreto, no contraría ninguno de los referidos principios.

En suma, se debe entender —de acuerdo con las disposiciones de los arts. 54 y 55 de la ley 25.156— que el instituto de la prescripción está destinado a regir la situación de los investigados con relación al ejercicio de "las acciones que nacen de las infracciones" previstas en ese régimen legal, *strictu sensu* —que es durante el procedimiento administrativo—, y no con posterioridad a la impugnación del acto dictado por el órgano administrativo competente a través del recurso directo deducido con el objeto de que se revise judicialmente la sanción impuesta. Dicho remedio es, en definitiva, la vía de impugnación de un acto administrativo promovida por el sujeto sancionado.

No puede verse en ello una afectación de las garantías constitucionales de las empresas sancionadas, habida cuenta de que la Corte Suprema ha precisado que el derecho de la defensa en juicio no requiere necesariamente que se asegure al acusado la exención de responsabilidad por el solo transcurso del tiempo, pues en determinadas circunstancias pueden

mediar motivos que tornen imperioso descartar la prescripción de las acciones penales o prolongar sus plazos (*doctrina de Fallos* 193:326; 211:1684 y 307:1466). Ese criterio fue recordado por los jueces Augusto C. Belluscio y Carlos S. Fayt cuando destacaron, en forma más reciente, que no existe ninguna norma constitucional en el derecho argentino que establezca que los delitos deban siempre prescribir (*ver los votos en disidencia de ambos magistrados en Fallos* 327:3312 y *del doctor Fayt en Fallos* 328:2056). Con mayor razón, no habría afectación constitucional por el hecho de aplicar esa doctrina tratándose de la instancia revisora de la sanción impuesta por un órgano administrativo.

Las leyes especiales pueden sustituir, modificar o reformar parcialmente el régimen de la prescripción establecido en el código penal, ya sea fijando en su reemplazo una reglamentación diferente; declarando imprescriptibles los delitos que prevé; alargando o reduciendo los términos o variando el momento de su iniciación; eliminando la interrupción o la suspensión o ambos institutos a la vez, o solamente modificando su contenido o sus efectos, etc. (*cfr. Oscar N. Vera Barros, ob. cit., págs. 412/13*).

Este enfoque debe conjugarse con la jurisprudencia del Alto Tribunal que reconoce que la duración razonable del proceso integra el derecho de defensa en juicio, cuestión a la que se hará referencia en el próximo considerando.

Por lo demás, aunque se prescinda de dicho enfoque, cabe recordar, una vez más, que no es este un juicio penal en el que se revisa la condena por haberse cometido un delito. Ello conduce a una interpretación de las garantías constitucionales y de las disposiciones legales dictadas en su consecuencia que sin llevar a su desconocimiento sea congruente con la finalidad del legislador de “despenalizar” ciertos aspectos de la ley 25.156 y de asignar la competencia a un tribunal que no es penal para revisar judicialmente las decisiones del órgano administrativo, la cual no obstante las observaciones del decreto 1019/99 se mantuvo en el decreto reglamentario 89/01. (Las empresas no sólo no han planteado la inconstitucionalidad de esa norma ni la incompetencia en estas actuaciones, sino que han pedido medidas y deducido recursos ante esta Sala —Indura, en las causas 2538/02 y 2929/02;

Praxair en la causa 9676/04- y formulado presentaciones para que este tribunal continuara conociendo en la causa -Air Liquide, a fs. 9221/24vta.) .

Es decir, la aplicación de los principios y garantías propios del derecho penal -entre los cuales las empresas incluyen la prescripción de la acción que han invocado después del pronunciamiento que confirmó la Resol. SCT 119/05- no puede prescindir de que en esta instancia judicial no se recurre una sentencia definitiva dictada por un órgano jurisdiccional ubicado en la órbita del Poder Judicial, en razón de la comisión de conductas ilícitas que constituyan delitos, sino la sanción impuesta por la autoridad administrativa con motivo de infracciones a la LDC (*ver doctrina de la Cámara Federal de Casación, Sala IV, en las causas n° 11.782 "Juan Minetti SA" y n° 11.783 "Cem. S.Martín y L. Negra", ambas del 21 de junio de 2012, citadas anteriormente*).

Consecuente con lo dicho, el tribunal no advierte motivos que impidieran el dictado de la sentencia del 10 de agosto de 2012, por lo que no es admisible el planteo de nulidad que formulan las empresas con sustento en la prescripción de la acción que nace de la infracción a la ley 25.156 después de concluida la investigación, de impuesta la sanción y de haber sido confirmada con motivo de los recursos directos que interpusieron para requerir la revisión judicial de la decisión del órgano administrativo.

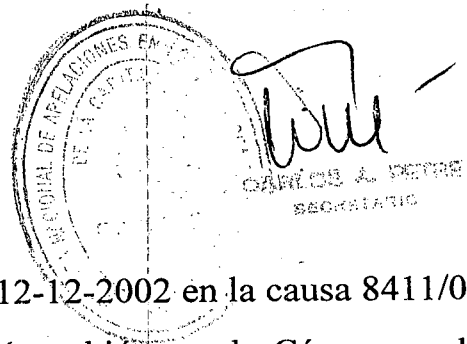
10. La acción que nace de las infracciones a la ley 25.156 importa el ejercicio de la potestad punitiva estatal, destinada a hacer efectiva la tutela del interés público a través del procedimiento regulado en el capítulo VI para la investigación y sanción de conductas prohibidas, con la limitación temporal prevista en los arts. 54 y 55 que, a través de la prescripción de dicha acción, garantiza ante el órgano administrativo el debido proceso legal en punto al derecho del sujeto investigado por una infracción a obtener un pronunciamiento dentro del plazo establecido por la ley.

Esto no quiere decir que una vez impuesta la sanción por el órgano administrativo y abierta la instancia judicial con el recurso directo previsto en los arts. 52 y 53 de la ley 25.156, ésta pueda durar indefinidamente.

En efecto, más allá de las normas procesales que fijan los plazos para que se dicten ciertos actos y los remedios establecidos para evitar demoras en el servicio de justicia (en el caso, la Corte Suprema concedió la prórroga solicitada por la Sala para dictar sentencia), se debe considerar que, en materia de infracciones administrativas, le asiste al sancionado la garantía del debido proceso y de la defensa en juicio, reconocida en el art. 18 de la Constitución Nacional y en el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el derecho a la duración razonable del proceso que defina su situación en el tiempo más rápido posible, de acuerdo con las concretas circunstancias que exhibe el caso (*Fallos 332:1492*).

La Corte Suprema, con remisión a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisó que el concepto de plazo razonable “debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso” (*Fallos 327:4815 y 330:3640*). Asimismo, destacó que ni siquiera la mera prolongación del proceso penal afecta por sí sola las garantías constitucionales sino en cuanto una mayor celeridad sea posible y razonable (*Fallos 312:573*).

Según esas pautas, no puede concluirse que este proceso judicial, con las particularidades que han sido destacadas tanto en la sentencia del 10 de agosto de 2012 (ver, en especial, el párrafo primero del considerando 1) como en la presente decisión, haya tenido una duración irrazonable susceptible de afectar la garantía del debido proceso y la defensa en juicio de las empresas recurrentes. Aún cuando se considerase también el procedimiento administrativo, al cual también es aplicable la exigencia de una duración razonable (*Corte Suprema, in re “Losicer Jorge Alberto y otros c. BCRA”, L.216.XLV, del 26-6-2012*), la conclusión sería la misma en virtud de las concretas circunstancias del caso y de la amplitud con la que las empresas han ejercido su derecho a la revisión judicial de las decisiones del órgano administrativo (además de los planteos formulados en los recursos directos que se examinaron en estas actuaciones, ver las resoluciones dictadas por esta Sala durante el procedimiento administrativo en virtud de los incidentes promovidos por las empresas: el 11-4-2002 y el 24-4-2002 en la causa



Poder Judicial de la Nación

2538/02, el 15-8-2002 en la causa 2929/02, el 12-12-2002 en la causa 8411/02 y el 15-3-2005 en la causa 9676/04, como así también por la Cámara en lo Penal Económico y por los tribunales federales que intervinieron en los allanamientos).

El derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal se integran por una rápida y eficaz decisión judicial (*Fallos 300:1102*). Este último presupuesto de la decisión –eficacia– debe necesariamente vincularse con la amplitud de la revisión judicial promovida por los recurrentes ante esta instancia.

Tampoco se debe perder de vista que el requisito de la duración razonable del juicio penal ha sido concebida originalmente por la Corte Suprema para satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es la de reconocer el derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca su situación frente a la ley penal, poniendo término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal (*Fallos 272:188*).

Esa situación es distinta a la que se examina. Por un lado, como se ha destacado en esta resolución, no puede asimilarse el procedimiento de revisión judicial de una sanción administrativa de multa –como el previsto en la ley 25.156– con la apelación deducida contra la sentencia dictada en un juicio criminal. Por el otro, hay una clara e innegable diferencia entre los derechos humanos a la dignidad y a la libertad, y los derechos patrimoniales que les asisten a las sociedades comerciales como personas jurídicas. No ha de verse en esta interpretación un modo de desconocer la protección de los mencionados derechos patrimoniales; antes bien, se la debe entender como una forma de contrastar dos situaciones que son diferentes y que, como tales, merecen un abordaje también diferente.

Para determinar si se ha conculcado la garantía a obtener un proceso sin dilaciones indebidas se deben ponderar, entre otros factores, la duración del retraso, las razones de la demora, la aserción del imputado de su derecho y el perjuicio concreto que le irroga tal prolongación (*ver dictamen de*

USO OFIC AL

la Procuración General en Fallos 330:3640 con remisión al estándar de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para examinar el derecho denominado "speedy trial"). En el caso las empresas impugnan una sanción pecuniaria cuya ejecución ha quedado suspendida con la interposición de los recursos directos (art. 52 *in fine* de la ley 25.156), en tanto que no podrían invocar ningún perjuicio por tener que cumplir con la orden de cese y abstención de una conducta prohibida por la ley.

Por el contrario, la admisión del planteo de las empresas importaría que quedase sin efecto la orden de cese y abstención de una conducta prohibida por la ley 25.156 y la multa impuesta por el órgano administrativo —después de haber sido confirmada por este Tribunal— no sólo para sancionar la concertación de precios, el reparto de clientes y la coordinación de posturas en procesos de contratación de oxígeno medicinal, proyectando sus consecuencias en el ámbito de la salud pública, sino también para disuadir futuras prácticas restrictivas de la competencia que afecten el interés económico general, es decir, a la sociedad.

11. Sólo resta añadir que no es correcta la afirmación de Indura en cuanto a que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 7 de agosto de 2008 dio a V.E. un plazo de 120 días para dictar sentencia en autos, lo que no se cumplió".

La empresa no ha considerado que el 21 de febrero de 2008 el Alto Tribunal concedió una prórroga de ciento veinte días para dictar sentencia (fs. 9385), la cual se sumó a la otorgada con anterioridad por igual plazo (fs. 9395). Tampoco ha tenido en cuenta que ese término fue suspendido mediante la resolución del 23 de diciembre de 2008 (fs. 9402/vta.), reanudado con la del 19 de abril de 2012 (fs. 9574/vta.). Todos esos actos fueron oportunamente notificados a las partes (con relación a Indura, ver fs. 9391, 9401, 9411 y 9582).

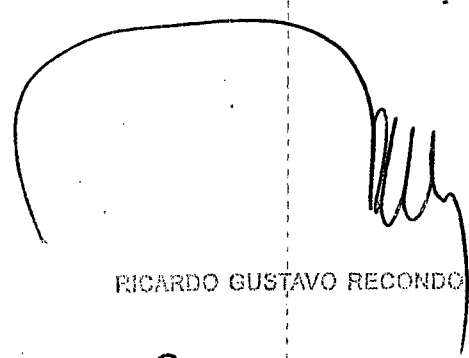
Por lo expuesto, **SE RESUELVE:** 1. rechazar los planteos de nulidad formulados por Air Liquide, Indura y Praxair para que en esta instancia se deje sin efecto la resolución del 10 de agosto de 2012 por considerar que se dictó después de operada la prescripción de la acción, 2. distribuir las costas por su orden en atención a la novedad de la cuestión y a



Poder Judicial de la Nación

las particularidades que exhibe, 3. agregar los recursos extraordinarios interpuestos por las cuatro empresas y correr traslado al Estado Nacional, por el término de diez días.

Regístrese y notifíquese.

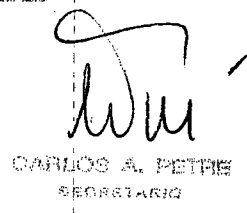

RICARDO GUSTAVO RECONDO


GRACIELA MEDINA


GUILLERMO ALBERTO ANELO

USO OFIC AL

SALA CIVIL Y COMERCIAL N° 3
Registrado al N° 256 T° 3
DEL LIBRO DE SENTENCIAS


CARLOS A. PETRE
SECRETARIO